



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-5

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 50
O R D I N A R I A
LUNES 5 DE JUNIO DE 2017

En la Ciudad de México, siendo las doce horas con dos minutos del lunes cinco de junio de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número cuarenta y nueve ordinaria, celebrada el jueves primero de junio del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del lunes cinco de junio de dos mil diecisiete:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

L 402/2014

Contradicción de tesis 402/2014, suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, respectivamente, los amparos directos en revisión 1018/2014 y 1609/2011. En el proyecto formulado por el señor Ministro Javier Laynez Potisek se propuso: *“PRIMERO. Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere. SEGUNDO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno en la tesis redactada en el último considerando del presente fallo”*. La tesis a que hace referencia el punto resolutivo segundo tiene por rubro: *“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITIÓ EL ESTUDIO DE LOS PLANTEAMIENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD”*.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales consultó el sentido del voto del señor Ministro Pérez Dayán, respecto de los considerandos sexto y séptimo relativos, respectivamente, al estudio de fondo y a la decisión.

El señor Ministro Pérez Dayán recordó haberse pronunciado en contra del proyecto durante la discusión en sesiones anteriores, en el sentido de que la existencia de un agravio es determinante para considerar la legitimación de un tercero interesado para promover una revisión en amparo directo, cuando un tema de constitucionalidad planteado por



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

el quejoso no haya sido abordado por un tribunal colegiado, lo cual concuerda con el criterio de la Segunda Sala.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente resultado:

Se expresó una mayoría de seis votos en contra de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Piña Hernández, Medina Mora I., Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de los considerandos sexto y séptimo relativos, respectivamente, al estudio de fondo y a la decisión. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo separándose de algunas consideraciones y Laynez Potisek votaron a favor.

Dada la votación alcanzada, consistente en una mayoría en contra del proyecto, a propuesta del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el Tribunal Pleno acordó returnar el asunto y encargar la elaboración del engrose a la señora Ministra Luna Ramos, con la anuencia de ésta, en la inteligencia de que dicho retorno se computará como un turno para efectos estadísticos. Similar criterio se tomó en la contradicción de tesis 57/2015, resuelta en sesión de ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Por tanto, la votación de este último tema deberá indicar:

Se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Piña



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Hernández, Medina Mora I., Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de los considerandos sexto y séptimo relativos, respectivamente, al estudio de fondo y a la decisión, en el sentido de que el tercero interesado no está legitimado para interponer la revisión en amparo directo cuando el tribunal colegiado omitió el estudio de los planteamientos de constitucionalidad del quejoso. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo y Laynez Potisek votaron en contra.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados, en la inteligencia de que la redacción definitiva de la tesis derivada de esta resolución, cuyo texto debe incluirse en la sentencia correspondiente, una vez aprobado el engrose respectivo, se someterá al procedimiento administrativo que regularmente se sigue ante el Comité de Aprobación de Tesis, en términos de lo previsto en el artículo 14 del Acuerdo General 20/2013.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

II. 101/2016

Recurso de queja 101/2016, interpuesto por el Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad en el Municipio de Puebla y el autorizado de la parte quejosa, en contra de la resolución de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el incidente de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

cumplimiento sustituto tramitado en el juicio de amparo indirecto 7/2015. En el proyecto formulado por el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se propuso: *“PRIMERO. Es procedente pero infundado el recurso de queja promovido por Humberto González de Gante e Irma Espinosa de Hernández y/o Irma Espinosa Agis. SEGUNDO. Es procedente pero infundado el recurso de queja interpuesto por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. TERCERO. Se confirma la resolución recurrida”*.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación, a la procedencia, a la resolución impugnada y a los agravios, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó los considerandos séptimo y octavo relativos, respectivamente, al estudio del asunto y a la decisión.

Narró los antecedentes del asunto: 1) se promovió un amparo indirecto (1798/2013) en contra del Ayuntamiento de Puebla, así como del Director de Obras de ese municipio,



con motivo de la privación de una fracción de terreno y la construcción de una vialidad sobre dicho inmueble, planteándose en los conceptos de violación que ello ocurrió sin que fueran previamente llamados y vencidos en juicio y sin que mediara decreto expropiatorio por causa de utilidad pública ni pago de la indemnización correspondiente, 2) el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Puebla inicialmente dictó una sentencia sobreseyendo en el juicio de amparo, 3) se interpuso recurso de revisión, por lo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito revocó dicho sobreseimiento y ordenó reponer el procedimiento, a fin de emplazar a una diversa autoridad responsable, 4) una vez repuesto el procedimiento, se dictó nueva sentencia por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien concedió el amparo para el efecto de que se restituyera la fracción de terreno afectada y, de no ser ello posible, se indemnizara a los quejosos, 5) esta resolución fue confirmada en revisión por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, 6) se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria, 7) informaron que no era posible restituir al quejoso en la posesión del inmueble objeto del acto reclamado, porque se encuentra en funcionamiento una vialidad pública sobre esa fracción de terreno, por lo que externaron su disposición para dar cumplimiento a la sentencia mediante el pago de la indemnización correspondiente, 8) las responsables



precisaron que el seis de junio de dos mil siete fue la fecha oficial de apertura de la vía denominada Avenida Libertad, y realizaron un avalúo de esta fracción de terreno, que ascendió a \$53,600.00 (cincuenta y tres mil, seiscientos pesos 00/100 M.N.), 9) se le dio vista a los quejosos, quienes se inconformaron con la cantidad propuesta, ya que estimaron que no se encontraba actualizada y porque la afectación no sólo correspondía a los aproximadamente cuarenta metros cuadrados, sino a la totalidad del predio afectado, 10) el juez de distrito exhortó a las partes a llegar a un convenio, 11) por acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciséis, el juez de distrito ordenó la apertura del incidente de cumplimiento sustituto, 12) la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla ofreció distintas pruebas documentales dirigidas a demostrar que las autoridades realizaron las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria, 13) el Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura de ese Ayuntamiento, en representación de éste, informó que estaba pendiente el incidente de liquidación de sentencia, lo que tenía primero que resolverse antes de abrir otro incidente, de ahí que era innecesaria la apertura del incidente de cumplimiento sustituto, 14) el seis de junio siguiente, los quejosos manifestaron que se justificaba el incidente de cumplimiento sustituto, insistiendo en que, para la afectación, no sólo debía tomarse en cuenta la porción de cuarenta metros, sino la totalidad del predio, de doscientos metros cuadrados, 15) el siete de junio, el juez de distrito



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

acordó un escrito de la autoridad, la que se opuso a la tramitación del incidente de cumplimiento sustituto y destacó que, previo al inicio de otro recurso en materia de cumplimiento, el juzgado debería llevar a cabo acciones tendentes a llegar a un convenio favorable, 16) no se logró dicho convenio y se abrió un incidente a fin de determinar la procedencia del pago respecto del total del predio de la quejosa, 17) el juez de distrito estableció que, cualquiera que fuera la decisión que se adoptara respecto a la indemnización total o no del inmueble, se abriría un incidente para cuantificar el monto a pagar al quejoso por concepto de indemnización, 18) con respecto a la prueba pericial ofrecida, el juzgador acordó resolver lo procedente hasta que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte determinara si era procedente o no el cumplimiento sustituto, 19) el juez de distrito dictó sentencia en el incidente de cumplimiento sustituto, con los siguientes puntos resolutivos: “PRIMERO: Fue procedente la tramitación y resolución del presente incidente de cumplimiento sustituto. SEGUNDO: En términos de lo expuesto en esta resolución, se estima que no existe imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, y por tanto es improcedente el cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo a través del pago de los daños y perjuicios ocasionados a la parte quejosa respecto a la fracción del terreno de su propiedad”.

El proyecto propone determinar que los argumentos de la quejosa no combaten las consideraciones que estableció el juez de distrito en relación con la cosa juzgada, en tanto



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

que la quejosa, en realidad, pretendía variar la sentencia del amparo, en la cual se limitó a restituir o indemnizar respecto de la fracción afectada del inmueble y no en relación con la totalidad del predio.

Apuntó que, originalmente, el proyecto determinaba la inoperancia de esos argumentos pero, con base en un comentario en económico de la señora Ministra Piña Hernández, no sería conveniente utilizar ese calificativo, dado que existe la suplencia de la queja para el cumplimiento de la sentencia de amparo, por lo que probablemente habría que hacer un análisis oficioso de este punto y, en consecuencia, modificó el proyecto para confirmar la determinación del juez de distrito, en el sentido de que no podría variarse la litis ni los efectos precisados en la sentencia de amparo, en la cual se especificó que la indemnización sólo debiera ser respecto de la fracción afectada a la parte quejosa, es decir, aproximadamente cuarenta metros cuadrados.

Por lo que hace al recurso de la autoridad vinculada al cumplimiento, se propone determinar que sus argumentos resultan infundados e inoperantes. Infundados en cuanto a que la resolución dictada no es incongruente, como se alega, en razón de que aquélla parte de la base de que la sentencia de amparo establece un efecto primario —restituir la fracción de terreno afectada a las quejas— y, de no ser posible, —como en el caso, dada la existencia de una calle pública en operación— las indemnicen como corresponde, conforme a



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

las normas legales aplicables. Puntualizó que el juez, al dictar la sentencia en el incidente de cumplimiento sustituto, tomó solamente en cuenta el segundo efecto —de la indemnización—, siendo que el primero no se discutió cuando la autoridad responsable manifestó que no había la posibilidad de restituirle el terreno a la quejosa porque se encontraba en funcionamiento una calle; que la autoridad, en su recurso, sostuvo que esa sentencia es incongruente porque, por un lado, estableció que no hay imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia y, enseguida, determinó que no procede el cumplimiento sustituto de la misma; pero que ello fue porque el juez sólo tomó en cuenta el efecto de la indemnización.

Finalmente, señaló que, al estimarse infundados los recursos de queja, se llega a la conclusión de que el juzgador tendrá que dar ejecución al acuerdo en el que determinó que abrirá un incidente encaminado a determinar el monto de la indemnización que corresponde a la quejosa.

La señora Ministra Piña Hernández manifestó que, en términos generales, el efecto del amparo es restituir al quejoso en el goce del derecho violado y, de no ser posible, tramitar un incidente de cumplimiento sustituto. En el caso, en la sentencia se estableció que se le restituyera al quejoso el predio de cuarenta metros cuadrados pero, como ya estaba construida la calle, estableció que se le indemnizara conforme a las normas legales aplicable, es decir, la misma sentencia estableció un cumplimiento sustituto.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Recapituló que tanto la quejosa como la autoridad responsable asumieron que podía darse el cumplimiento restituyendo o indemnizando, y mientras la quejosa pidió que la indemnizaran con respecto a todo el predio, las responsables argumentaron que, como se determinó la indemnización conforme a las normas legales aplicables, debería observarse la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, la cual determina que será el valor catastral por los metros cuadrados.

Hizo hincapié en que no estaría por la calificación de inoperantes de los agravios, sino, como ya se aceptó por el señor Ministro ponente Pardo Rebolledo, de infundados, dado que el artículo 213 de la Ley de Amparo prevé la suplencia de la queja y la vía en lo concerniente a los incidentes y recursos en esta materia.

Apuntó que si la propia sentencia estableció el efecto de la indemnización, coincidiría con el proyecto porque ambas partes están de acuerdo con dicha indemnización, y si la quejosa solicita de todo el predio, estaría de acuerdo en que no procedería. Por lo que ve a los agravios de la autoridad, en relación con la incongruencia, también concordó en que resultan infundados.

Expresó que sería viable precisar que, conforme a los criterios de esta Suprema Corte, debe entenderse que la indemnización involucra el valor comercial más actualización, en aras de alcanzar una indemnización real y



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

no sólo la derivada de la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla.

La señora Ministra Luna Ramos estimó que la concesión del amparo fue correcta, mas no los efectos que se imprimieron, pues debió establecerse la devolución del predio y no la indemnización en caso de no poder devolverse, en razón de que se trata de una sentencia de un juicio constitucional y, por tanto, únicamente debió resolverse si había o no una violación a un derecho humano. Advirtió que este error fue confirmado por el tribunal colegiado, máxime que éste dio lineamientos específicos para esa indemnización.

Retomó que, cuanto empezaron los requerimientos, la autoridad adujo no poder devolver la fracción de terreno porque ya funcionaba la calle, por lo que optó por el otro efecto de la sentencia: indemnizar, por lo que solicitó a otras autoridades información respecto del valor catastral del inmueble, tomando en consideración la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla; sin embargo, valoró que no debieron basarse en tal norma, puesto que no se trató de una expropiación, sino de un simple desposeimiento. No obstante, la autoridad determinó la cantidad de \$53,600.00 (cincuenta y tres mil, seiscientos pesos 00/100 M.N.), de lo que el quejoso se inconformó porque no estaba actualizado y porque no se tomó como base la totalidad del predio. En ese estado de circunstancias, el juzgador inició de oficio el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo; pero se



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

dio el problema de que, cuando se tramitó, se suspendió el desahogo de la prueba pericial. Precisó que, como explicó el señor Ministro ponente Pardo Rebolledo, el juez determinó que no hay imposibilidad en el cumplimiento de la sentencia, porque la indemnización puede pagarla la autoridad, pero improcedente respecto de la totalidad del terreno.

Indicó que, a pesar de esa decisión, los quejosos insistieron en su argumento de que se les pagara la totalidad del predio, lo cual se desestima en el proyecto correctamente, en la inteligencia de que la totalidad del terreno no fue la litis del juicio de amparo, sino solamente los cuarenta metros afectados por la construcción de la calle, con lo cual se manifestó de acuerdo. Por otro lado, la autoridad responsable esgrimió un problema de incongruencia porque, primero, el juez determinó que el cumplimiento sustituto era procedente, y luego que no había imposibilidad.

Explicó que el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo procede cuando no se puede cumplir en sus términos; sin embargo, en el caso concreto se imprimieron dos efectos —devolver el predio y, de no ser posible, indemnizar—, por lo que el juez estimó que no había imposibilidad para ese pago y, por tanto, era improcedente el cumplimiento sustituto, y después dijo que procedía, por lo que tiene razón la autoridad responsable en que hubo incongruencia, pero es intrascendente.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Consideró pertinente especificar cómo se debe cumplir la sentencia de amparo porque, de lo contrario, se tendrá el mismo problema dentro de poco tiempo. Observó que la cantidad referida por indemnización fue fijada unilateralmente por la autoridad responsable, por lo que propuso determinar que, para efectos de cumplimiento y por economía procesal, se abra el incidente de liquidación correspondiente y se tramite la prueba pericial ya ofrecida, para calcular el monto de la indemnización, de acuerdo con el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo.

El señor Ministro Laynez Potisek respaldó la propuesta de la señora Ministra Luna Ramos, con miras a que no se defina el monto unilateralmente por la autoridad responsable, máxime que, en el caso, hay cosa juzgada. Recordó que los quejosos nunca tuvieron la posibilidad de un procedimiento expropiatorio, en el cual interpusieran recurso de revocación—previsto en la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla— y alegaran la indemnización de todo su predio, sino que se trató de un despojo. Por ello, estimó que, como mínimo, debería indicarse que los avalúos deberán ser a valor comercial.

La señora Ministra Luna Ramos aclaró que el desahogo de la prueba pericial deberá tramitarse conforme a la Ley de Amparo, no conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles, como es el criterio mayoritario de este Tribunal Pleno.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La señora Ministra Piña Hernández manifestó que, aparte de determinar que se abra el incidente innominado, debe precisarse que la prueba pericial tome en cuenta el valor comercial más actualización.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se pronunció en favor del proyecto, en los términos en que fue presentado.

El señor Ministro Pérez Dayán se posicionó en favor del proyecto porque, en asuntos similares, ha estado de acuerdo en que la indemnización no se limite a revisar el precio del inmueble en cuanto a su valor comercial actualizado, sino que también deben considerarse los daños y perjuicios. No obstante, en el caso, la decisión del tribunal colegiado confirmó las dos opciones dadas en la sentencia de amparo y, bajo esta perspectiva, si no se pudo restituir la posesión del inmueble, se deberá pagar a los quejosos, aclarando que se trata de un cumplimiento anómalo o atípico de una sentencia de amparo.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena se expresó de conformidad con el proyecto.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo, respecto de las sugerencias de modificación, recordó que el juez de distrito no estimó que el monto determinado por la autoridad responsable es el que regirá para la indemnización, sino que el siete de junio de dos mil dieciséis señaló que, cualquiera que fuera la determinación adoptada, y una vez resuelto lo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

relativo al cumplimiento sustituto, se iniciaría una incidencia a efecto de cuantificar el monto a pagar al quejoso por concepto de indemnización. Respecto de la prueba pericial, el juez de distrito reservó acordar lo procedente hasta en tanto este Tribunal Pleno determinara si procedía o no el cumplimiento sustituto.

Modificó el proyecto para enfatizar esta determinación del juez en estos dos aspectos.

El señor Ministro Franco González Salas se pronunció en favor del proyecto original.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada de los considerandos séptimo y octavo relativos, respectivamente, al estudio del asunto y a la decisión, la cual se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas en contra de la argumentación añadida durante la sesión, Zaldívar Lelo de Larrea en contra de la argumentación añadida durante la sesión, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto concurrente. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz y Luna Ramos reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Acto continuo, levantó la sesión a las doce horas con cincuenta y ocho minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a una sesión privada, una vez que se desaloje la Sala, así como a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el martes seis de junio del año en curso, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.



SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN